



## ¿MISIÓN CUMPLIDA? LA MILITARIZACIÓN DE LA GESTIÓN SANITARIA FRENTE A LA COVID-19 EN BRASIL

Francisco J. Verdes-Montenegro y Tamires A. Ferreira Souza\*

23 de noviembre de 2021

### Resumen

El presente trabajo ahonda en la gestión realizada durante el periodo del general Eduardo Pazuello como ministro de Salud en Brasil. Se atiende con especial atención la congruencia de unos discursos y prácticas que aquí se caracterizan de militarizadoras en la medida en que se inscriben en una dinámica más amplia que definen la presidencia de Bolsonaro, en la que se institucionaliza el predominio de la esfera militar sobre la civil. Este caso cobra especial interés ya que supone una ampliación de los roles asignados a los militares brasileños y su politización, aprovechando una crisis sanitaria de primera magnitud como la pandemia de COVID-19. Como se pone en evidencia, los resultados de la gestión sanitaria están lejos de corresponderse a la retórica que subraya una mayor probidad y competencia de las Fuerzas Armadas respecto a los civiles.

### Introducción

“Misión cumplida” es la expresión que utilizó Eduardo Pazuello, general de división en activo del Ejército brasileño, para caracterizar su gestión como ministro de Salud desde el 16 de mayo de 2020 hasta el 23 de marzo de 2021<sup>1</sup>. Una gestión marcada, por un lado, por el momento en el que se produce, en plena respuesta sanitaria a la pandemia de coronavirus (COVID-19) y, por otro lado, tras la di-

misión de dos ministros de Salud, Luiz Henrique Mandetta y Nelson Teich, que discrepaban de las posiciones de Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, a la hora de gestionar la respuesta a la crisis sanitaria. Un detalle no menor respecto a sus predecesores es la vinculación profesional y bagaje con el que accede al puesto el propio Pazuello, ya que es un militar en activo sin experiencia en el área, para cuya designación se aludió a su pericia en materia logística (*EFE*, 2020).

Este nombramiento, además, se inscribe en una dinámica más amplia que caracteriza la presidencia del excapitán, Jair Bolsonaro, y en palabras de este, su “gobierno todo militarizado”<sup>2</sup>. Durante su

\* Francisco J. Verdes-Montenegro es investigador en la Fundación Carolina. Doctor en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. Tamires A. Ferreira Souza es coordinadora y profesora del Grado en Relaciones Internacionales de la Universidad de Ribeirão Preto y doctora en Relaciones Internacionales por el programa de posgrado San Tiago Dantas (UNESP, UNICAMP y PUC-SP).

<sup>1</sup> En un primer momento Pazuello asume el cargo de forma interina, si bien el 14 de septiembre de 2020 Bolsonaro lo confirma como ministro numerario.

<sup>2</sup> Tras la victoria de Bolsonaro en las elecciones de 2018, el propio excapitán calificó su gobierno de “todo militarizado”, plasmado en la presencia de los siguientes ministros con víncu-



mandato, el número de militares presentes en carteras ministeriales y altos cargos de entidades públicas es más del doble, llegando a niveles nunca vistos en la democracia brasileña, que superan incluso guarismos del periodo de dictadura militar. Según el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), en 2018, antes de su llegada, el número de militares que ocuparon cargos en la administración pública federal era de 2.765 y, ya con él en el Palacio de Planalto, se ha cuantificado en 6.157 para 2020. Parte de este crecimiento (1.969), ocurrió debido a la contratación temporal de reservistas para el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), además de otros 709 militares, activos o en la reserva, que ocupan cargos comisionados (o de libre designación) en la Presidencia, Vicepresidencia y Ministerios (TCU, 2020). Cuando analizamos los detalles de los números presentados, se comprueba que un porcentaje significativo de los militares están en cargos comisionados (2.643) y en el ámbito de la salud (1.249). A su vez, no se puede perder de vista que también están en consejos administrativos y en dirección de grandes empresas estatales, como Petrobras, Eletrobrás, Itaipu

Binacional, Telebrás y Correios (Nozaki, 2021).

Un aspecto novedoso de la presidencia de Bolsonaro es que ha alterado las relaciones cívico-militares brasileñas, con un gobierno integrado por militares que en primera instancia fue bien aceptado por la ciudadanía, sobre todo en comparación con aquellos perfiles procedentes de la política tradicional. Dentro de la ambigüedad y complejidades que caracterizaron las relaciones cívico-militares durante la transición a la democracia, las Fuerzas Armadas brasileñas han logrado con los años darle la vuelta a la imagen deteriorada con la que cargaba tras la dictadura militar, y figurar entre las instituciones públicas más respetadas. Así, se han identificado tres tendencias que, durante la presidencia de Bolsonaro, se han acentuado: (i) el empleo de las Fuerzas Armadas en actividades subsidiarias, (ii) la participación política de los militares y su interferencia en procesos político-democráticos y (iii) la intensificación del uso de los militares como administradores, en especial con la irrupción de la pandemia de COVID-19 (Ramalho, 2021).

---

lo castrense: general del Ejército Braga Netto (Casa Civil, sustituido en 2021 por el senador Ciro Nogueira), mayor de la Policía Militar Jorge Oliveira (Secretaría-General, sustituido en 2021 por el general del Ejército Luiz Eduardo Ramos), general del Ejército Augusto Heleno (Gabinete de Seguridad Institucional), general del Ejército Santos Cruz (Secretaría del Gobierno, sustituido en 2021 por la congresista Flávia Arruda), general del Ejército Fernando Azevedo e Silva (Ministerio de Defensa, en 2021 sustituido por Braga Netto), almirante de Escuadrón Bento Albuquerque (ministro de Minas y Energía), y teniente-coronel de la Fuerza Aérea Marcos Pontes (ministro de Ciencia y Tecnología) (GI, 2020).

Para Hamilton Mourão, vicepresidente con Bolsonaro, y otro de los militares que conforman su equipo de gobierno, “los militares que fueron llamados a trabajar en el gobierno que inició en enero de 2019 vinieron solo para participar, como ciudadanos en el pleno ejercicio de sus derechos y como profesionales competentes del Estado, en el esfuerzo de racionalización, efectividad y moralización de la administración pública, en favor de la elevación del país” (Mourão, 2021). Se



aprecia así cómo estos nombramientos tienden a acompañarse de un discurso que, respecto a los político-civiles, asocia a los militares con una serie de rasgos intrínsecos entre los cuales sobresale, como apunta el propio Mourão (2021) la “lealtad y probidad, además de una mayor competencia técnica”.

Estas ideas no son azarosas y se inscriben en un contexto de “malestar en la democracia” en toda la región, muy visible en el caso de Brasil (Verdes-Montenegro, 2021). Demandas de amplios sectores de la población no satisfechas, sumadas a episodios de corrupción que se sucedieron en el país con motivo de casos como “Mensalão” o “Lava Jato”, en el que estaban involucrados medio centenar de políticos y empresas como Petrobras y Odebrecht, profundizaron la desafección hacia la política y sus instituciones (Latino-barómetro, 2018). Esto, sumado a la progresiva asunción de tareas internas a raíz de la proliferación de operaciones enmarcadas en la Garantía de Ley y Orden (GLO), abrió una ventana de oportunidad del campo político a supuestos *outsiders* como Bolsonaro, y a la politización de las Fuerzas Armadas (Harig, 2021).

En este último caso, no solo se valora la percepción de orden y mano dura con la que se asocia a los militares, sino también un presunto “honestismo” y una mayor eficacia en la gestión. En ese sentido, lo militar se vincula a valores como los de obediencia, abnegación, jerarquía, preparación, patriotismo o eficacia, y en algunos sectores de la ciudadanía de los países latinoamericanos se percibe al militar como menos corruptible que un político procedente del ámbito civil, y como una

fuerza de “orden” en un contexto político que ha generado una sensación de descontrol. Detrás de estos imaginarios se halla la instrumentalización de las Fuerzas Armadas en términos electorales por parte de algunos políticos. Así, de la misma forma que se habla de *pinkwashing*, *purplewashing* o *greenwashing*, se podría aludir a una suerte de *khakiwashing* para expresar el uso de las Fuerzas Armadas —uniformados caracterizados por sus tonos caqui— o a personas vinculadas a ellas, como estrategia de comunicación política que proyecta una imagen asociada a los valores y virtudes que estas inspiran en un contexto de desafección hacia la política y los políticos (Verdes-Montenegro, 2019).

Por ello, este trabajo pretende ahondar, a través del análisis de fuentes primarias y secundarias, en la congruencia de tales discursos y prácticas que aquí se caracterizan como militarizadoras —en tanto que se alinean con una dinámica que institucionaliza el predominio de la esfera militar sobre la civil<sup>3</sup>—, analizando la gestión y efectos del periodo de Eduardo Pazuello como ministro de Salud. Este caso cobra especial interés ya que supone una ampliación de los roles asignados a los militares y su politización, aprovechando una crisis sanitaria de primera magnitud como la pandemia de COVID-19, que expande la esfera de influencia castrense en la política y administración pública brasileña. En ese sentido, además, se abordarán

<sup>3</sup> Se entiende por “militarización” un tipo de securitización que se lleva a cabo por medio de un proceso intersubjetivo que institucionaliza el predominio de lo militar sobre lo político, con una serie de efectos excepcionales que cristalizan en el espacio público (Verdes-Montenegro, 2020).

dos crisis políticas que jalonan su mandato al frente de la cartera: la primera, en la que llega a su puesto tras las discrepancias entre Bolsonaro y sus predecesores (Mandetta y Teich) por la estrategia de respuesta a la pandemia; y la segunda, coincidente con su dimisión, en la que se produce la primera dimisión en bloque del estamento militar en la historia de la democracia brasileña.

### **Crisis de entrada: un militar al frente del Ministerio de Salud de Brasil**

La pandemia de COVID-19 empezó a hacerse patente en Brasil a partir del 26 de febrero de 2020, con la confirmación de su primer caso. El presidente Jair Bolsonaro, desde el inicio de la pandemia, se desmarcó del consenso científico existente a la hora de responder a la pandemia y minimizó sus impactos, refiriéndose a ella como una “*gripezinha*”, y cuestionando el “pánico” y “histeria” de la población. Además, sin pruebas científicas que lo ampararan, recomendó la utilización de fármacos, como la cloroquina o ivermectina, para responder a la enfermedad (Abdenur, 2020).

Por su parte, las Fuerzas Armadas brasileñas tuvieron un rol central en el campo logístico y operacional de enfrentamiento a la pandemia con la “Operación Regreso” como primer hito. Desarrollada por la Fuerza Aérea brasileña, consistió en el rescate de 34 brasileños aislados en la ciudad de Wuhan (China). Posteriormente, la “Operación COVID-19” fue creada por el Ministerio de Defensa, con el establecimiento de un centro de operaciones nacional. Entre sus actividades puede mencionarse la vigilancia de sepultamientos, buscando datos cuantitativos de ce-

menterios y sepulturas en las principales urbes del país, como São Paulo y Río de Janeiro. Además, se utilizó a las Fuerzas Armadas para servicios de salud en regiones de difícil acceso, como las comunidades indígenas del Alto do Solimões (segunda área brasileña de mayor concentración de indígenas) (Observatório Brasileiro de Defesa e Forças Armadas, 2020).

En septiembre de 2020, el general Fernando Azevedo e Silva, ministro de Defensa, declaró que la “Operación COVID-19” realizó: “6.200 descontaminaciones en sitios públicos; 11.000 acciones de control en la frontera; montaje de unos 2.500 puestos de clasificación; creación de 4,8 barreras sanitarias; 6.722 campañas de concienciación y sensibilización de la población; y 33.000 donaciones de sangre”, además de propiciar transporte aéreo en apoyo al suministro de insumos y materiales (Lima, 2020a). Adicionalmente, hubo un desplazamiento diario de aproximadamente 34.000 militares, gasto financiero equivalente a 68 millones de reales (R\$) destinados al desplazamiento de aeronaves, y 37,7 millones de reales para contratación de servicios de mantenimiento (Zanini; Serapião y Seto, 2020).

Ahora bien, dejando a un lado este apoyo de las Fuerzas Armadas brasileñas durante la gestión de la pandemia, que ha podido darse frente al desborde, o en ayuda, de los sistemas sanitarios y epidemiológicos, ha habido otras medidas que vinculan a militares en esta gestión sobre las que es preciso poner el foco, máxime al tener al presidente de Brasil como su principal responsable e implicar una politización del cuerpo castrense.

Así, sin evidencia científica que lo corroborara, Bolsonaro y Azevedo e Silva solicitaron al Ejército la elevación de la producción de cloroquina en los laboratorios de las Fuerzas Armadas. Investigaciones posteriores han apuntado a la existencia de presiones por parte del gobierno federal para la inserción del medicamento en los protocolos para tratamiento de COVID-19. Los ministros de Salud Luiz Henrique Mandetta y Nelson Teich dimisieron de sus cargos por no alinearse con la posición de Bolsonaro (a imitación de la adoptada por Trump) que contravenía la respuesta a escala global y recomendada por expertos y organismos especializados como la Organización Mundial de la Salud (OMS) a la hora de mitigar la propagación del virus en ausencia de una vacunación generalizada: aislamiento social junto con protocolos de prevención y tratamiento de la COVID-19 (Rossi y Oliveira, 2021).

En esa coyuntura de tensión entre Bolsonaro y Mandetta, se apreció además cómo este último empezó a lograr un apoyo en las encuestas que llegó a superar al del propio mandatario, logrando al mismo tiempo la mayor aprobación registrada para un ministro que ha ostentado dicha responsabilidad (Gráfico 1). Buena parte de este respaldo fue fruto de la firmeza y convicción de Mandetta en la necesidad de seguir los consensos científicos, ganando popularidad entre la población con sus boletines diarios sobre el avance de la pandemia en el país. Tras su renuncia por las discrepancias con Bolsonaro, asumió el cargo Nelson Teich, quien no alcanzó a aguantar un mes en el cargo por razones similares.

Así, tras estas dos dimisiones, Bolsonaro designó al general del Ejército brasileño, Eduardo Pazuello, como ministro de Salud en mayo de 2020, situación inédita en la política brasileña. Su llegada al Ministerio se había producido semanas antes como secretario-ejecutivo del Ministerio, de la mano de Nelson Teich. Según afirmaba este, “necesitamos ser mucho más eficientes de lo que somos hoy. Hablamos de logística, compras, distribución. Y él [Pazuello] es una persona muy experimentada en esto” (GI, 2020).

La designación despertó entre algunos militares brasileños insatisfacción puesto que Pazuello ostentaba (y aún ostenta) la condición de militar en activo. Por un lado, esto demostraba un grado de compromiso del Ejército con el gobierno (que cedió la autorización, después de presiones del presidente) y, por otro lado, el temor de que la gestión pudiera ser desastrosa e impactar negativamente en la imagen de la institución militar (Uribe y Cancian, 2020).

### **¿Militares más eficaces? Los hechos frente a los discursos**

La gestión de Pazuello como ministro de Salud ha estado marcada desde el primer momento por la polémica, tanto por las decisiones adoptadas como por sus omisiones y retrasos. Con su llegada a la cúspide del Ministerio, Pazuello empezó su gestión interina con la designación de 20 militares en activo como sus asesores, y sustituyendo a funcionarios técnicos por militares sin formación o experiencia en salud. Además, optó por una modificación del modelo de recuento de muertes por COVID-19. Estas dos acciones despertaron movilizaciones políticas en el



país y forzaron la convocatoria del ministro por la Cámara de los Diputados para rendir cuentas al respecto.

Pazuello informó, por su parte, que los nombramientos de los militares estaban alineados con el patrón de todas las secretarías ejecutivas, centrándose en la capacidad de gestión. Y en cuanto a la alteración del recuento de muertes, la justificaba por una búsqueda de mayor “transparencia de los datos”. Sin entrar en los paralelismos que podría tener este cambio con lo sucedido a raíz de la epidemia de meningitis durante la dictadura militar, distintos partidos de la oposición (Rede Sustentabilidad, PSOL y PCdoB) cuestionaron las declaraciones, motivando la decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) para que el Ministerio volviera al modelo de recuento anterior.

Estas no fueron ni mucho menos las únicas polémicas ligadas a la gestión de Pazuello ya que, en agosto de 2020, fue llamado nuevamente a rendir cuentas respecto a la superproducción de cloroquina por el Ejército, que tenía casi un millón de comprimidos en inventario (Borges, 2020)<sup>4</sup>. El TCU empezó a investigar la posible responsabilidad del presidente Bolsonaro en la elevación de la producción de este fármaco en el primer semestre de 2020 (84 veces superior en comparación con 2017-2019), máxime al no existir amparo científico que demostrara su eficacia para el tratamiento de la COVID-19. Durante la audiencia que acompañó las indagaciones, quedó paten-

te la subordinación del Ministerio de Salud a la ideología del presidente, que seguía con posiciones negacionistas respecto de la pandemia y contraviniendo las directrices de la OMS (Lima, 2020b). Bolsonaro, a pesar del número creciente de infectados, no dejó de participar en eventos públicos y aglomeraciones, como la ceremonia del comandante militar del Sur y en manifestaciones con tintes antidemocráticos.

Por si fuera poco, desde el Ministerio de Salud se retuvieron los fondos para combatir el virus, dejando de invertir en partidas destinadas a mitigar los efectos de la crisis, como la contratación de médicos, reestructuración de hospitales, pruebas (*test*) de COVID-19 para prisiones, entre otros. En un informe realizado en julio de 2021 por la procuradora del Ministerio Público de Cuentas de São Paulo, Élica Graziane Pinto, se señalaba que 435,5 millones de reales, de los 715 billones de recursos extraordinarios destinados al combate de la pandemia en Brasil, quedaron en manos del Ministerio de Defensa, y fueron mayoritariamente utilizados en gastos ordinarios (Guimarães y Godoy, 2021). Todo ello, sin constancia de que se gastaran en beneficio de la población en general ni para asistir a hospitales militares, que se negaron a proporcionar camas para el tratamiento de pacientes civiles con COVID-19 (Pinto, 2021)<sup>5</sup>.

<sup>4</sup> Se ha comprobado una inversión de más de 30 millones de reales para la producción y compra de cloroquina y hidroxiclороquina en 2020 (Senado, 2021).

<sup>5</sup> Estos fondos fueron asignados a partidas de “materiales dentales (R\$ 58.621.000); semental o material zootécnico (R\$ 25.525.000); material educativo y deportivo (R\$ 3.458.000); material de cama, mesa y baño (R\$ 225.8310.00); material de despensa y cocina (R\$ 430.384.000); uniformes, tejidos y adornos (R\$ 1.076 millones); material/equipamientos/servicios para audio, video y fotos (R\$ 709.100); manteni-



Sumado a ello, no cabe perder de vista dos cuestiones del periodo Pazuello que justificaron la creación de una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) en el Senado brasileño y aceleraron su salida: la gestión de las vacunas, especialmente de CoronaVac, y la crisis de suministro de oxígeno en Manaus.

Respecto a la adquisición de las vacunas, en junio de 2020 se llevó a cabo una alianza entre el Instituto brasileño Butantan y la empresa china Sinovac, con la mediación del gobierno del estado de São Paulo, para la compra de insumos chinos y producción de la vacuna CoronaVac por dicho instituto. Por su parte, Pazuello, aún en 2020, desarrolló un protocolo de intenciones junto a esa alianza para adquisición de la vacuna por parte del gobierno federal, siendo, no obstante, cancelado directamente por Bolsonaro.

Cabe recordar que el mandatario brasileño ha mantenido sus críticas sobre la efectividad de las vacunas contra la COVID-19, declarando que el agente inmunizante debería ser opcional para la población brasileña e incluso vinculándolo con el Sida (Soares, 2020). Ahora bien, ya en 2021 y con el retraso correspondiente tras un cambio de posicionamiento, la CoronaVac fue finalmente adquirida por parte del gobierno federal. Durante la CPI se puso en evidencia la falta de respuesta a los correos electrónicos de la farmacéu-

---

miento y conservación de inmuebles (R\$ 6.219 millones); servicio de energía eléctrica/agua y alcantarillado/gas/servicios domésticos (R\$ 5.992 millones); vehículos de tracción mecánica (R\$ 3,6 millones); además de gastos médico-hospitalarios con materiales y servicios de casi R\$ 100 millones” (Pinto, 2021).

tica Pfizer<sup>6</sup>, lo que no solo contradujo el testimonio de Pazuello, sino que también explicaba el retraso en su gestión. Al final, el ministro terminó por eludir la responsabilidad señalando que las negociaciones para compra de vacunas no eran su función, y que estas le correspondían al nivel administrativo (Vargas y Rezende, 2021).

La CPI, asimismo, ha llevado a cabo investigaciones durante seis meses que, entre otros asuntos, han tratado de esclarecer el intento de compra de las vacunas AstraZeneca a través de la empresa intermediaria Davati Medical Supply. El director de logística del Ministerio de Salud en la época, Roberto Ferreira Dias, habría cobrado presuntamente una comisión de un dólar por dosis, y el teniente coronel Marcelo Blanco, exasesor del Ministerio de Salud, sería el responsable por dar continuidad a la negociación. En la misma comisión también se ha tratado el caso de la vacuna Covaxin, por supuestas irregularidades en el intento similar de compra a través de una empresa intermediaria, e involucrando esta vez la vacuna india y la empresa Precisa Medicamentos. Distintos testimonios apuntan a la participación del Ministerio de Salud y militares en la sobrefacturación de las vacunas. Los militares y exmilitares citados en la CPI involucrados en investigaciones son, además de Pazuello, Élcio Franco, por retraso en compra de vacunas; Marcelo Blanco da Costa, por propinas para adquisición de vacunas; Bento Pires y Alex Lial Marinho, por el caso Covaxin; y Ro-

---

<sup>6</sup> Entre agosto y noviembre de 2020, hubo un total de siete propuestas de compra de vacunas, además de diversos correos electrónicos, no contestados.

berto Dias, por el caso AstraZeneca (Machado, 2021).

Por si fuera poco, a principios de 2021, Manaus, capital del estado de Amazonas, sufrió una crisis de suministro de oxígeno, con un aumento de muertes de 187% en todo el estado. Pazuello visitó Amazonas y afirmó que Manaus era “una prioridad nacional en este momento” (*GI Amazonas*, 2021a). El estado registró casi 6.000 muertes y más de 223.000 casos de COVID-19 desde el inicio de la pandemia, siendo afectado, en ese momento, por una nueva variante del coronavirus. Pazuello justificó la crisis del oxígeno por la distancia y dificultad logística.

Por su parte, Bolsonaro consideró que el gobierno federal actuó para evitar el caos y, en sus redes sociales, afirmó que había ofrecido oxígeno y transporte a los pacientes del estado, además de recursos financieros, del orden de casi 9 millones de reales (*GI Amazonas*, 2021b). No obstante, durante la CPI se comprobó que esta situación estuvo repleta de omisiones e ineficiencia. Frente a la declaración de Pazuello, quedó patente que hubo un retraso en la respuesta a las solicitudes de apoyo por parte de la empresa White Martins y del gobernador del estado de Amazonas, que advertían del “inminente agotamiento” de oxígeno en Manaus (Sassine, 2021).

A diferencia de los otros ministros de Salud, y como también se ha puesto en evidencia durante la CPI, Pazuello se mantuvo fiel a las convicciones de Bolsonaro, actuando con lentitud tanto para elaborar un plan nacional de inmunización contra la COVID-19, como a la hora

de implementar acciones frente el agravamiento de la pandemia. Parte de ese retraso se debe al empeño en una estrategia que, anteponiendo lógicas económicas, pretendía lograr la “inmunidad de rebaño” (o de grupo) y mitigar los efectos con el denominado como “tratamiento precoz” contra el virus, por medio del “kit-covid” —es decir, un conjunto de fármacos para tratar los primeros síntomas de la COVID-19, como la cloroquina o ivermectina—, cuya eficacia no está demostrada científicamente.

A pesar de las dificultades a la hora de discernir las responsabilidades individuales durante la respuesta a una pandemia, el balance de la gestión de Pazuello queda reflejado en las cifras agregadas de los principales indicadores. Tal y como se recoge en el Anexo 1, se observa una elevación exponencial de casos de COVID-19 durante su mandato al frente del Ministerio de Salud, acompañado de unos registros dramáticos en fallecimientos vinculados con la pandemia. En el momento de su dimisión, Brasil superó por primera vez los 3.000 fallecidos en un día, y contabilizaba un total de 400.000 muertes a causa del virus, la segunda cifra más alta a escala internacional tras EE.UU. Además, este país encabezó la media diaria de nuevos decesos, siendo responsable de una de cada cuatro víctimas fatales al día por la enfermedad en todo el mundo.

En ese sentido, durante los 10 meses que Pazuello estuvo al frente de la cartera de salud, la cifra de contagios pasó de 222.142 a 12,13 millones, multiplicándose por más de 50 (54,3). En cuanto a los fallecidos, la cifra se multiplicó práctica-



mente por 20 (19,11), al pasar de 15.633 fallecidos a 298.843. Además, el ritmo de vacunación fue más bajo y lento de lo previsto, con un 7,02% de cobertura del conjunto de la población en el momento de su destitución como ministro. Por todo ello, llegaron a plantearse denuncias por parte de la Orden de Abogados de Brasil, colegio de abogados y máxima representación de esta profesión, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; y organizaciones como Médicos Sin Fronteras llegaron a afirmar que Brasil atravesaba una “catástrofe humanitaria” debido a la gestión del tándem Bolsonaro-Pazuello (EFE, 2021). A las críticas a la gestión se sumaron medios como el *Washington Post*, o revistas científicas como *Science*.

A tal punto se ha cuestionado el manejo de la pandemia por parte de Pazuello que, en julio de 2021, el Ministerio Público Federal envió a la Justicia Federal una acción de improbidad administrativa contra este que aún sigue su curso. Según la pieza firmada por ocho fiscales de la República, se estima que la gestión de Pazuello costó la vida a 100.000 brasileños y casi 122 millones de reales en daños al fisco (aproximadamente 24,2 millones de dólares); todo ello sin cuantificar el daño moral colectivo por la pérdida de miles de vidas (Infobae, 2021).

En octubre de 2021, la CPI imputó al exministro por crímenes de epidemia con resultado de muerte, uso irregular de fondos públicos, prevaricación, comunicación falsa de crimines y delitos de lesa humanidad. El informe, además, señala a Bolsonaro como el principal responsable

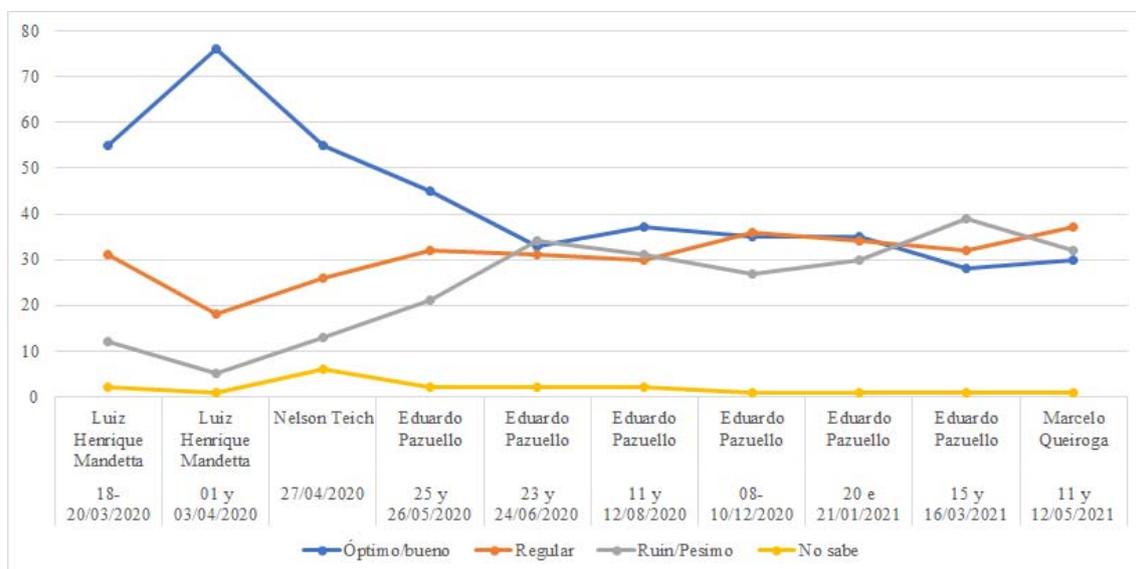
y le atribuye 9 delitos<sup>7</sup>, que implican a otros 77 cargos y 2 empresas, en una gestión errática que evitó salvar a 120.000 personas, equivalente al 20% de los fallecidos por COVID-19 en Brasil hasta finales de marzo de 2021, por adoptar medidas no farmacológicas ni basadas en la ciencia. El documento también apunta que, en 2020, se contabilizaron más muertes por COVID-19 en Brasil por cada 100.000 habitantes que en el 89,3% del resto de países (de un total de 179), y que, además, el país figura a octubre de 2021 en la séptima posición en número de fallecidos por millón de habitantes en el mundo (Senado, 2021). Dicho informe, junto con sus conclusiones, se remitió a la Fiscalía brasileña, y se ha barajado su notificación a la Corte Penal Internacional.

La evaluación del desempeño del Ministerio de Salud brasileño por parte de su ciudadanía no fue ajena a esta situación dramática. De acuerdo con la encuesta realizada por el Instituto de Pesquisa Datafolha (2021), entre los tres ministros de Salud del gobierno de Bolsonaro, la gestión de Pazuello fue quien obtuvo una valoración más baja, especialmente en marzo de 2021, momento de su destitución: un 40% que la consideró entonces “pésima/mala”, la cifra más alta durante la pandemia.

---

<sup>7</sup> Entre esos nueve cargos figuran los crímenes de epidemia con resultado de muerte; infracción de medida sanitaria preventiva; charlatanería; incitación al delito; falsificación de documento privado; uso irregular de fondos públicos; prevaricación; delitos de lesa humanidad; y delitos de responsabilidad (Senado, 2021).

**GRÁFICO 1. Evaluación del desempeño del Ministerio de Salud en relación a la pandemia de COVID-19**



Fuente: Adaptado de Instituto de Pesquisa DataFolha, 2021.

Asimismo, a raíz de la gestión de Pazuello se aprecia un cambio en las percepciones de la opinión pública respecto a los militares, no ajena a su dimisión. Según sondeos realizados por Vox Populi (2020), un 18% de la población brasileña confía mucho en los militares, un 32% más o menos, un 17% poco, y 31% no confía. Y, en cuanto a la presencia de un militar en el Ministerio de Salud, un 82% cree que no es una buena solución, frente a un 15% que asegura que sí lo es. Se aprecia así que la gestión de Pazuello, además de sus escasos resultados sanitarios, también impactó, como ya temían los militares, en la credibilidad y confianza en la institución castrense.

### **Crisis de salida: escenificando el alejamiento de la alta cúpula militar**

El 23 de marzo de 2021, Pazuello solicitó su renuncia del Ministerio de Salud, mar-

cando el final de su mandato lleno de crisis y debilidades. En un vídeo divulgado en distintos medios, anunció su salida del Ministerio de Salud junto al nuevo ministro, Marcelo Queiroga. Durante la misma, afirmó que desde febrero de 2021 tenía conocimiento de ocho “acciones orquestadas” en contra de su Ministerio. Afirmó que fue presionado por políticos interesados en un “*pixulé*” (comisión ilícita), y que cayó tras identificar a un grupo de médicos ministeriales dispuestos a boicotearlo, que “empujaron” al presidente Bolsonaro una “nota pseudo técnica que nos pondría en extrema vulnerabilidad”. Además, Pazuello afirmó que, cuando llegó al Ministerio, este “carecía de gestión, liderazgo, ética, probidad, honestidad y responsabilidad” (Mascarenhas, 2021). El ya exministro admitió que no esperaba un crecimiento tan abrumador de la pandemia en 2021, si bien



trató de justificarse afirmando que lo hizo lo mejor posible.

En esa coyuntura marcada por el fracaso de Pazuello al frente de la cartera de Salud, y tras la anulación de todas las sentencias dictadas contra “Lula” da Silva (el candidato con más opciones y experiencia para disputarle a Bolsonaro la victoria en las próximas elecciones presidenciales de 2022), se produjo una crisis de gobierno con un hecho insólito sobre el que conviene detenerse.

Sin que hubiese transcurrido una semana desde la salida de Pazuello, el 29 de marzo de 2021 se desencadenó la mayor crisis entre el gobierno brasileño y la cúpula militar del periodo democrático: al destituir Bolsonaro al ministro de Defensa, renunció al completo la cúpula de las Fuerzas Armadas brasileñas. El ministro de Defensa, general Azevedo e Silva fue cesado por no aceptar una mayor politización de los militares, y su lugar lo ocupó otro general, Walter Braga Netto. Tras esta decisión, el general del Ejército Edson Leal Pujol; el almirante Ilques Barbosa Júnior, de la Armada; y el brigadier Antonio Carlos Moretti Bermudez, de la Fuerza Aérea, presentaron su renuncia.

A este respecto, era patente el deterioro de la relación entre Bolsonaro y Edson Leal Pujol, ante la resistencia de este último a politizar e instrumentalizar el Ejército a raíz del enfrentamiento del presidente con gobernadores y alcaldes por las medidas ante la pandemia. En más de una ocasión Bolsonaro se ha referido a la institución en estos términos: “mi Ejército no va a obligar al pueblo a quedarse en casa” (Garlarraga Gortázar, 2021). Paralela-

mente, Bolsonaro habría ordenado a Pujol oponerse al STF, debido a las decisiones favorables a “Lula” da Silva. Sin embargo, Pujol intentó desvincularse en todo momento de las acciones del presidente, con una estrategia que se ha calificado de “*desvillasboização*” en contraposición al perfil más injerencista de su predecesor, el general Villas Boas, conocido por sus polémicas declaraciones amenazantes sobre Lula durante la campaña brasileña de 2018 (Víctor, 2020).

Azevedo e Silva (2021), a través de un comunicado, mostró su agradecimiento a los integrantes de las Fuerzas Armadas, puntualizando que buscó mantenerlas “como instituciones del Estado”. Como afirmó Martins Filho, “en la mañana del 29 de marzo los militares tenían su imagen erosionada por la mala gestión del general Eduardo Pazuello como ministro de Salud, y al final del día, fueron vistos como defensores de la Constitución y de la misión principal de las Fuerzas Armadas, resistiendo a un gobierno que intentaría arrastrarlos a la política” (Observatório Sul-Americano de Defesa e Forças Armadas, 2021).

Ahora bien, este intento de escenificar la ruptura de la cúpula civil y militar, y su alejamiento del gobierno de Bolsonaro tras la situación sanitaria que había encabezado Pazuello, quedó en entredicho al día siguiente, con el comunicado sobre el golpe militar de 1964 que hizo público el nuevo ministro de Defensa, Braga Netto. En él se celebraba el golpe de 1964 como un hito histórico, cambiando el texto del exministro Azevedo e Silva, y apuntando que la dictadura fue una solicitud del pueblo (Chaib y Machado, 2021).



Así, el intento de la cúpula militar de hacer frente a las acciones del gobierno y preservar su imagen de poder moderador y eficiente no fue exitosa. La nueva cúpula militar presentó desde el primer día un posicionamiento claro de cuestionamiento de la democracia brasileña junto con un alineamiento a las visiones de Bolsonaro, conocidas desde su candidatura a la presidencia.

Ahora bien, esta deriva del estamento militar como fuerza auxiliadora de Bolsonaro está incidiendo en la percepción de la ciudadanía de las Fuerzas Armadas. De acuerdo con el Instituto de Pesquisa DataFolha, un 58% rechaza la presencia de militares en funciones de la administración pública —en 2020 era un 52%—, frente a un 38% que está a favor. Asimismo, un 62% cree que los militares no deberían participar de actos políticos (Gielow, 2021).

Como apunta Esther Solano, “la dimisión de la cúpula castrense no implica que exista una crisis institucional descomunal, sino que hay una crisis con un grupo de las Fuerzas Armadas. Pero otro grupo (de militares) más cercano al presidente se beneficiará” (Garlarraga Gortázar, 2021). Así, aún existe un número elevado de militares involucrados en el gobierno, fiadores de sus acciones, influyentes en la formulación de políticas y beneficiarios de las regalías y privilegios garantizados por Bolsonaro, como las prerrogativas respecto a la reforma de las pensiones, aumentos salariales o exenciones a los “super-salarios” (Nozaki, 2021).

Por su parte, Pazuello abandonó el Ministerio, y por tanto su cargo político, pero

continuó asociado a Bolsonaro, pese a ser un militar en activo con un deber de neutralidad política. Este vínculo se reflejó durante su comparecencia en la CPI y su firme defensa del mandatario brasileño ante los errores e irregularidades en la gestión de la pandemia.

A su vez, a los dos meses de su salida, el 23 de mayo de 2021, Pazuello participó junto al presidente en un acto político en Río de Janeiro no exento de polémica, denominado “Caravana de motocicletas”. Y no solo porque fue una aglomeración en la que no se utilizaron mascarillas, sino también porque este acto —en el que el ya exministro de Salud acompañaba a Bolsonaro en una moto—, fue a todas luces una manifestación política en la que, por su condición de militar en activo, legalmente Pazuello no debía participar.

Según el Reglamento Disciplinario del Ejército, se trata de una transgresión el incumplimiento del Estatuto Militar, que prohíbe la manifestación pública de un militar en activo sin autorización. Bolsonaro prohibió al Ejército y al Ministerio de Defensa reprender públicamente a Pazuello y, según algunas fuentes, solicitó al general Nogueira de Oliveira que no penalizara a Pazuello (Vasconcellos, 2021). Así, dicho incumplimiento no fue reconocido como transgresión disciplinaria por el Ejército, imponiendo secreto de sumario al expediente disciplinario por 100 años, lo que resultó revertido parcialmente en decisión de la Contraloría General de la Unión. Una semana después de su participación en dicha movilización, y tras la polémica suscitada por infringir el deber de neutralidad política, el 1 de junio de 2021 Pazuello fue designado

secretario de Estudios Estratégicos en la Secretaría de Asuntos Estratégicos vinculada a la Presidencia de la República.

### **Reflexiones finales: ¿lealtad, probidad y competencia respecto a quién?**

A lo largo del presente análisis se ha puesto en evidencia la incongruencia de una narrativa militarizadora que dota de una mayor competencia en la gestión de los asuntos públicos al sector castrense respecto al civil. A partir del caso paradigmático del general Pazuello en el Ministerio de Salud brasileño, primer militar en ocupar dicha cartera, se han contrastado distintas problemáticas —nombrosamientos, vacunación, enfoque y tratamiento frente a la pandemia, asignación de fondos, gestión de crisis— que ponen en evidencia una *praxis* más que mejorable a la luz de los resultados obtenidos, y cuya probidad está siendo sujeto, en algunos casos (como en el de las vacunas), a distintas investigaciones en curso que le involucran a él y a su equipo de confianza. Incluso la CPI, además de imputarle por crímenes contra la humanidad en su informe final, emitió un informe previo a la Fiscalía brasileña, identificando un número significativo de declaraciones de Pazuello que no respondían a los hechos (suyas son 15 de las 38 declaraciones falsas o contradictorias advertidas).

En ese sentido, la supuesta probidad y competencia son más que discutibles en vista de lo acontecido en Brasil durante la gestión de la pandemia por parte del tándem Bolsonaro-Pazuello. Como se ha apuntado, incluso se puede poner en duda el criterio de lealtad señalado por Mourão para justificar la incorporación de militares a tareas civiles. A este respecto, la

lealtad sí que se observa hacia Bolsonaro, llegando incluso a alinearse con planteamientos sin evidencia científica que sus predecesores civiles, Mandetta y Teich, no estaban dispuestos a acatar, como en el caso paradigmático de la cloroquina. No obstante, dicha lealtad se debería ceñir sobre todo al orden constitucional brasileño y a su marco legislativo, en el que ha de prevalecer el deber de neutralidad política para un militar en activo. Se confirmaría así la tesis de militarización civil en América Latina, entendida como un conjunto de prácticas y discursos que abren paso a un militarismo por invitación o cooptación, en aras de fortalecer la legitimidad del mandatario (civil) en cuestión. En este caso, además, con la peculiaridad de que el mandatario brasileño es un exmilitar.

La militarización de la gestión sanitaria en Brasil, encarnada en el mandato de Pazuello, está teniendo costes para las Fuerzas Armadas, tanto de su prestigio como institución pública, como en lo que respecta a su empleo en tareas que exceden la estrictamente militar y que competen a la esfera civil, como la sanitaria. En todo caso, y a pesar de algunos intentos para desvincularse de la gestión de Bolsonaro —como la dimisión de las cúpulas civil y militar tras la dimisión de Pazuello—, existen todavía demasiados vínculos entre el gobierno y las Fuerzas Armadas, cruzados con prerrogativas que están siendo adquiridas por estas últimas, que erosionan gravemente el principio de neutralidad política de este estamento en sistemas democráticos, e invitan a una revisión de los instrumentos para hacerlo efectivo.



Habida cuenta de las dinámicas militarizadas que permean las instituciones, es preciso preguntarse cómo ha podido cristalizar la presencia de Pazuello en el conjunto del Ministerio de Salud, tanto en lo que respecta a los nombramientos de militares que permanecen en su cargo tras su salida, como en los recursos canalizados a través de agencias de naturaleza militar o los procedimientos modificados en aras de unas lógicas de excepcionalidad, máxime con una pandemia todavía presente.

A su vez, cabe preguntarse si, al igual que la crisis económica de los años ochenta supuso el principio del repliegue militarizador en los países del Cono Sur, como Brasil, en favor de una dinámica democratizadora; la crisis sanitaria y la gestión de Pazuello supone asimismo un punto de inflexión a la expansión de los militares en la administración brasileña, e incluso una puesta en duda de las narrativas que otorgan una mayor efectividad y honestidad a los cuerpos castrenses respecto a los civiles. ¿Supone pues la experiencia de Pazuello en el Ministerio de Salud un antes y un después en la confianza y prestigio que recaban los militares por parte

de la ciudadanía brasileña? ¿Marcará al menos un freno en la politización de las Fuerzas Armadas brasileñas? Estos son algunos interrogantes que es preciso despejar en futuros trabajos; mientras tanto, el mero hecho de visibilizar la incongruencia entre los hechos acontecidos y algunos imaginarios proyectados es un primer paso para frenar la deriva militarizadora y caminar hacia horizontes más democratizadores.



### Conclusiones

- A partir del caso paradigmático del periodo del general Pazuello como ministro de Salud brasileño, primer militar en ocupar dicha responsabilidad, se han contrastado distintas decisiones —nombramientos, vacunación, enfoque y tratamiento frente a la pandemia, asignación de fondos, gestión de la crisis en la Amazonía— que ponen en evidencia una *praxis* más que mejorable a la luz de los resultados obtenidos.
- Se confirma la tesis de la militarización civil en América Latina, entendida como un conjunto de prácticas y discursos que abren paso a un militarismo por invitación o cooptación, en aras de fortalecer la legitimidad del mandatario (civil) en cuestión, en este caso, de Bolsonaro.
- La militarización de la gestión sanitaria en Brasil, encarnada en el mandato de Pazuello, está teniendo costes para las Fuerzas Armadas brasileñas, tanto de su prestigio como institución pública, como en lo que respecta a su empleo en tareas que exceden la estrictamente militar y que competen a la esfera civil, como la sanitaria (un 82% de la población considera que no es buena la presencia de un militar en el Ministerio de Salud).
- Cabe preguntarse si la crisis sanitaria y la gestión de Pazuello suponen un punto de inflexión para la expansión de los militares en la administración brasileña (con 1.249 militares de un total de 6.157 destinados en el ámbito sanitario, según los datos del TCU), e incluso una puesta en duda de las narrativas que otorgan una mayor efectividad y honestidad a los cuerpos castrenses respecto a los civiles.

### Referencias bibliográficas

- ABDENUR, A.E. (2020): “Una potencia tambaleante: la respuesta de Brasil a la pandemia de COVID-19”, *Análisis Carolina*, nº 29/2020ES, Madrid, Fundación Carolina.
- AZEVEDO E SILVA, F. (2021): “Nota Oficial MD”, *Defesanet* (30 de marzo). Disponible en: <https://www.defesanet.com.br/cm/noticia/40214/Fernando-Azevedo-e-Silva---Nota-Oficial-MD/>.
- BORGES, A. (2020) “Pazuello diz que falta cloroquina; Exército informa que tem estoque de quase 1 milhão de comprimidos”, *O Estado de S. Paulo* (19 de agosto). Disponible en: <https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,pazuello-diz-que-falta-cloroquina-exercito-informa-que-tem-estoque-de-quase-1-milhao-de-comprimidos,70003404915>
- CHAIB, J. y MACHADO, R. (2021): “Braga Netto Alterou ordem do dia sobre golpe de 1964 e excluiu menção de forças como instituição de Estado”, *O Estado de S. Paulo* (31 de marzo). Disponible en: <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/03/braga-netto-alterou-ordem-do-dia-sobre-golpe-de-1964-e-excluiu-mencao-de-forcas-como-instituicao-de-estado.shtml>
- CORPORACIÓN LATINOBARÓMETRO (2018): “Informe Latinobarómetro de 2018, *Latinobarómetro*, Santiago de Chile.
- EFE (2020): “Un militar sin experiencia asume como ministro interino de Salud en Brasil”, *Agencia EFE* (16 de mayo). Disponible en: <https://www.efe.com/efe/america/politica/un-militar-sin-experiencia-asume-como-ministro-interino-de-salud-en-brasil/20000035-4248127>.
- (2021): “Brasil vive una ‘catástrofe humanitaria’ por la pandemia, alerta MSF”, *Agencia EFE* (15 de abril). Disponible en: <https://www.efe.com/efe/america/sociedad/brasil-vive-una-catastrofe-humanitaria-por-la-pandemia-alerta-msf/20000013-4512673>
- G1 (2020): “Teich anuncia general Eduardo Pazuello como novo número 2 do Ministério da Saúde”, *Grupo Globo* (22 de abril). Disponible en: <https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/04/22/teich-anuncia-general-eduardo-pazuello-como-novo-numero-2-do-ministerio-da-saude.ghtml>
- G1 AMAZONAS (2021b): “Falta de oxígeno: o papel dos governos municipal, estadual e federal na crise que deixou pessoas morrerem asfixiadas por Covid no Amazonas”, *Grupo Globo* (15 de enero). Disponible en: <https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2021/01/15/falta-de->



- JOHNS HOPKINS UNIVERSITY CENTER FOR SYSTEMS SCIENCE AND ENGINEERING (2021): “COVID-19 Data Repository by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University”. Disponible en: <https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19>.
- LIMA, B. (2020a): “Entrevista a Fernando Azevedo”, *Correio braziliense* (22 de septiembre). Disponible en: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/579779/noticia.html?sequence=1&isAllowed=y>.
- (2020b): “Cloroquina: MP cita Bolsonaro e pede que TCU investigue superfaturamento”, *Correio Braziliense* (18 de junio). Disponible en: <https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2020/06/18/interna-brasil,865031/cloroquina-mp-cita-bolsonaro-e-pede-que-tcu-investigue-superfaturamen.shtml>.
- MACHADO, R. (2021): “Relator da CPI, Renan reage a Forças Armadas e diz que ‘não podemos ter medo de quarteladas’”, *Folha de S. Paulo* (9 de julio). Disponible en: <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/07/relator-da-cpi-renan-reage-a-forcas-armadas-e-diz-que-nao-podemos-ter-medo-de-quarteladas.shtml>.
- MASCARENHAS, G. (2021): “Pazuello sai atirando: boicote interno e pedido de políticos por ‘pixulé’”, *Veja* (24 de marzo). Disponible en: <https://veja.abril.com.br/blog/maquiavel/pazuello-sai-atirando-boicote-interno-e-pedido-de-politicos-por-pixule/>.
- MINISTERIO DE SALUD (2021): “Painel Coronavirus”, Brasília. Disponible en: <https://covid.saude.gov.br/>.
- MOURÃO, H. (2021): “O que os brasileiros esperam de suas Forças Armadas”, Gobierno de Brasil, discurso pronunciado por el Vicepresidente de la República (6 de abril). Disponible en: <https://www.gov.br/planalto/pt-br/conheca-a-vice-presidencia/discursos-pronunciamentos-artigos/o-que-os-brasileiros-esperam-de-suas-forcas-armadas>.
- NOZAKI, W. (2021): “A Militarização da Administração Pública no Brasil: projeto de nação ou projeto de poder?”, *Caderno da Reforma Administrativa*, Brasília, Fonacate.
- OBSERVATÓRIO BRASILEIRO DE DEFESA E FORÇAS ARMADAS (2020): “As Forças Armadas e a Pandemia”, *ObDEF*, nº 3-2020, GEDES. Disponible en: <https://gedes-unesp.org/wp-content/uploads/2021/04/Informe-tematico-As-FA-e-a-pandemia-2020.pdf>.
- OBSERVATÓRIO SUL-AMERICANO DE DEFESA E FORÇAS ARMADAS (2021):



- “Informe Brasil 10-2021”, período: 03/04/2021 - 09/04/2021, GEDES-UNESP. Disponible en: <https://gedes-unesp.org/wp-content/uploads/2021/04/Informe-Brasil-10-2021.pdf>.
- OUR WORLD IN DATA (2021): “Coronavirus (COVID-19) Vaccinations”. Disponible en: <https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=BRA>.
- PINTO, E. G. (2021): “Execução orçamentária do SUS no enfrentamento à pandemia da Covid-19”. Disponible en: <http://www.mpc.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/07/Relatorio-sobre-a-execucao-orcamentaria-do-SUS-Elida-G-Pinto.pdf>.
- RAMALHO, A.J. (2021): “Bajo el mandato de la ambigüedad: militares y gobernabilidad en la transición brasileña”, en Grabendorff W. (ed.): *Militares y gobernabilidad: ¿cómo están cambiando las relaciones cívico-militares en América Latina?*, ed. Fescol, Bogotá.
- ROSSI, M. y OLIVEIRA, R. (2021): “Exército assegura que produziu cloroquina a mando da Defesa e da Saúde, mas ministérios não admitem que ordem partiu deles”, *El País* (13 de julio). Disponible en: [https://brasil.elpais.com/brasil/2021-07-13/exercito-assegura-que-produziu-cloroquina-a-mando-da-defesa-e-da-saude-mas-](https://brasil.elpais.com/brasil/2021-07-13/exercito-assegura-que-produziu-cloroquina-a-mando-da-defesa-e-da-saude-mas-ministerios-nao-admitem-que-ordem-partiu-deles.html)
- [ministerios-nao-admitem-que-ordem-partiu-deles.html](https://brasil.elpais.com/brasil/2021-07-13/exercito-assegura-que-produziu-cloroquina-a-mando-da-defesa-e-da-saude-mas-ministerios-nao-admitem-que-ordem-partiu-deles.html).
- SASSINE, V. (2021): “Pazuello e Exército ignoraram pedidos em ofícios do governador do AM cinco dias antes de colapso de oxigênio”, *Folha de S. Paulo* (10 de junio). Disponible en: <https://www1.folha.uol.com.br/equlibrioesaude/2021/06/pazuello-e-exercito-ignoraram-pedidos-em-oficios-do-governador-do-am-cinco-dias-antes-de-colapso-de-oxigenio.shtml>.
- SENADO FEDERAL (2021) “CPI da Pandemia – Relatório Final”, Senado Federal de la República de Brasil (20 de octubre). Disponible en: <https://legis.senado.leg.br/comissoes/mnas?codcol=2441&tp=4>.
- SOARES, I. (2020): “Bolsonaro diz que não comprará vacina chinesa, mesmo se aprovada pela Anvisa”, *Correio Braziliense* (22 de octubre). Disponible en: <https://www.correio braziliense.com.br/politica/2020/10/4883906-bolsonaro-diz-que-nao-comprara-vacina-chinesa-mesmo-se-aprovada-pela-anvisa.html>.
- TCU (2020): “Memorando nº 57/2020- Segecex”, Tribunal de Cuentas de la Unión, Secretaría General de Control, República Federal de Brasil, Brasília.
- URIBE, G. y CANCIAN, N. (2020): “Bolsonaro decide efetivar Pazuello como ministro da Saúde”, *Folha de*

- S. Paulo (14 de septiembre). Disponible en: <https://www1.folha.uol.com.br/equlibrioesaude/2020/09/bolsonaro-decide-tornar-pazuello-ministro-definitivo-da-saude.shtml>.
- VARGAS, M. y REZENDE, C. (2021): “Ministério sabia desde 2020 que só Butantan poderia vender Coronavac, diz Dimas Covas”, *Folha de S. Paulo* (16 de julio). Disponible en: <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/07/ministerio-sabia-desde-2020-que-so-butantan-poderia-vender-coronavac-diz-dimas-covas.shtml>.
- VASCONCELLOS, J. (2021): “Mesmo com desgastes, Exército mostra mão amiga e livra Pazuello de punição”, *Correio Braziliense* (4 de junio). Disponible en: <https://www.correiobraziliense.com.br/politica/2021/06/4928875-mesmo-com-desgastes-exercito-mostra-mao-amiga-e-livra-pazuello-de-punicao.html>.
- VERDES-MONTENEGRO, F. J. (2019): “La (re)militarización de la política latinoamericana. Origen y consecuencias para las democracias de la región”, *Documentos de Trabajo* nº 14/2019 (2ª época), Madrid, Fundación Carolina.
- (2020) “La militarización como institucionalización de lo excepcional: la defensa en la teoría de la securitización”, en GARCÍA-SEGURA, C.; SANAHUJA, J.A. y VERDES-MONTENEGRO, F.J. (coords.): *100 años de Relaciones Internacionales: una mirada reflexiva*, Valencia, ed. Tirant Lo Blanch.
- (2021): “Democracias en disputa: elementos para el debate desde el ‘malestar en la democracia’ en América Latina”, *Análisis Carolina* nº 11/2021 (2ª época), Madrid, Fundación Carolina.
- VÍCTOR, F. (2020): “Órfaos de Moro, gerais vivem sinuca com Bolsonaro”, *Piauí*, Folha de São Paulo/UOL (5 de mayo). Disponible en: <https://piaui.folha.uol.com.br/orfaos-de-moro-gerais-vivem-sinuca-com-bolsonaro/>.
- VOX POPULI (2020): “Brasil Pesquisa de opinião pública”, *Vox Populi* (junio y julio). Disponible en: <https://www.brasil247.com/brasil/pesquisa-vox-populi-maioria-atribui-a-bolsonaro-a-responsabilidade-pelas-cries-na-saude-e-na-economia>.
- ZANINI, F.; SERAPIÃO, F. y G. SETO (2020): “Ministerio da Defesa pede R\$ 520 milhões para Paulo Guedes para ações contra o coronavírus”, *Folha de S. Paulo* (23 de mayo). Disponible en: <https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2020/05/ministerio-da-defesa-pede-r-520-milhoes-para-paulo-guedes-para-acoes-contra-o-coronavirus.shtml>.

**ANEXO 1. Comparativo entre infectados, fallecidos y vacunados en Brasil**

Ministro de Salud	Meses	Infectados	Fallecidos	Vacunados (al menos 1 dosis)
Mandetta	Febrero/2020	1	0	0
	Marzo/2020	5717	201	0
Mandetta y Teich	Abril/2020	87.187	6.006	0
Teich y Pazuella	Mayo/2020	514.849	29.314	0
Pazuella	Junio/2020	1.402.041	59.594	0
	Julio/2020	2.662.485	92.475	0
	Agosto/2020	3.908.272	121.381	0
	Septiembre/2020	4.810.930	143.952	0
	Octubre/2020	5.535.605	159.884	0
	Noviembre/2020	6.335.878	173.120	0
	Diciembre/2020	7.675.973	194.949	0
	Enero/2021	9.204.731	224.504	2.046.523 (0,96% de la población)
	Febrero/2021	10.551.259	252.942	6.518.628 (3,07% de la población)
Pazuella y Queiroga	Marzo/2021	12.748.747	321.515	14.921.376 (7,02% de la población)
Queiroga	Abril/2021	14.659.011	403.781	29.149.512 (13,71% de la población)
	Mayo/2021	16.545.554	462.791	45.376.214 (21,35% de la población)
	Junio/2021	18.557.141	518.066	72.722.360 (34,21% de la población)
	Julio/2021	19.917.855	556.370	103.060.000 (48,74% de la población)

Fuente: Ministerio de Salud, 2021; Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering, 2021; Our World in Data, 2021.



### Fundación Carolina, noviembre 2021

Fundación Carolina  
Plaza del Marqués de Salamanca nº 8  
4ª planta, 28006 Madrid - España  
[www.fundacioncarolina.es](http://www.fundacioncarolina.es)  
@Red\_Carolina

[https://doi.org/10.33960/AC\\_30.2021](https://doi.org/10.33960/AC_30.2021)

La Fundación Carolina no comparte necesariamente las opiniones manifestadas en los textos firmados por los autores y autoras que publica.



Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-  
NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Inter-  
nacional (CC BY-NC-ND 4.0)